

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (pp. 1-4)

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT VALENCIANA (pp. 5-8)

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada
doctora de Dret Administratiu*

Universitat Jaume I

Sumario: 1. Autorización ambiental integrada: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 954/2015, de 9 de noviembre. 2. Plan Integral de Residuos: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1160/2015, de 30 de diciembre.

Seguidamente se exponen las sentencias más relevantes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia por orden cronológico y se identifican por la temática tratada. En el período objeto de análisis no aparecen publicadas en las bases de datos consultadas sentencias del TSJ de la Comunidad Valenciana en relación con el medio ambiente; no obstante, se ha tenido noticia de dos pronunciamientos de gran importancia.

1. Autorización ambiental integrada: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 954/2015, de 9 de noviembre

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) 954/2015, de 9 de noviembre (recurso 65/2012), adopta una decisión determinante para el municipio afectado en cuanto a la protección del medio natural.

En efecto, en este caso las partes demandantes son el Ayuntamiento de l'Alcora y la plataforma ciudadana “No a la contaminació”, que impugnan la Resolución de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del año 2012 por la que se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 15 de junio de 2011, por la que se concedió a la empresa REYVAL AMBIENT, S. L., autorización ambiental integrada (AAI) para la instalación de almacenamiento y tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, pues los demandantes alegan que dicha AAI es contraria a derecho, por lo que piden su nulidad.

Las alegaciones de los demandantes, como señala el TSJCV, pueden sistematizarse en dos grupos:

1. Las relativas a los defectos en la tramitación del expediente.

En primer lugar se destacan la falta de realización de trámites fundamentales en materia ambiental como el trámite de información pública, puesto que se han producido modificaciones sustanciales del proyecto presentado, como también se alega en el recurso, y la ausencia de informes preceptivos y vinculantes.

Sobre la falta de información pública, el TSJCV señala que, en caso de que se produzcan modificaciones en el proyecto —sin exigir que estas sean sustanciales—, es

necesario practicar un nuevo trámite de información pública, y más aún si son sustanciales, como lo son en este caso y así lo entiende el Tribunal.

El Tribunal concluye que un mismo proyecto no puede tener concedidas dos AAI, de forma que la más reciente debe sustituir a la ya, en su caso, concedida.

Otra alegación procedimental se refiere a la falta de los preceptivos informes positivos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Ayuntamiento en donde se ubica la instalación, que se aprecia en este caso, pues se considera un vicio que supone la nulidad de la decisión adoptada por la Conselleria.

2. Las alegaciones que se refieren a las modificaciones sustanciales de la actividad que había obtenido la AAI, modificaciones que se habían ido produciendo desde el año 2007 y reiterado en el 2008, 2009 y 2011.

Efectivamente, la determinación de si la modificación es sustancial depende, como se desprende de la legislación aplicable —la Ley 16/2001 y la Ley 2/2006—, de la consideración del órgano competente para otorgar la autorización, aunque se especifican parámetros concretos a tener en cuenta para saber si esta es o no sustancial, entre ellos la salud de las personas o la afectación al medio ambiente, el grado de contaminación que se produce... En esa línea, ya en el año 2008 se consideró que las modificaciones realizadas en el proyecto eran sustanciales en relación con la instalación ya existente, así como también en 2009. El Tribunal pone de relieve que para considerar que la modificación es sustancial hay que tener en cuenta aspectos cuantitativos (tamaño, capacidad de producción...) y cualitativos (qué recursos naturales se utilizan, tipo de residuos producidos y gestionados...), elementos todos ellos que se aprecian en las pruebas presentadas por la parte actora y que estima el Tribunal, además de entender que las modificaciones no llevaron aparejado el necesario trámite de información pública ni de EIA.

Por todo lo anterior, el TSJCV declara la nulidad de la Resolución de 12 de abril de 2012 y, por lo tanto, declara la AAI concedida a la empresa REYVAL AMBIENT, S. L., no conforme a derecho. Frente a este recurso la empresa demandada ha interpuesto recurso de casación, por lo que la resolución final queda pendiente.

Para concluir con este comentario, es necesario comentar una cuestión que atañe a la protección del medio ambiente. Es verdad que la declaración de nulidad satisface a las partes demandantes pues se consigue dejar sin efecto la AAI; no obstante, al plantearse

el recurso de casación la instalación sigue realizando su actividad, lo que causa el consecuente perjuicio al municipio y a los vecinos afectados. De esta forma se observa que es en la ejecución de la sentencia donde debe actuarse rápidamente para paliar y evitar la contaminación ambiental.

2. Plan Integral de Residuos: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1160/2015, de 30 de diciembre.

Otros de los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en este período son el de 15 de diciembre de 2015, el de 17 de diciembre de 2015 y, finalmente, el de 30 de diciembre de 2015, en la Sentencia 1160/2015 (recurso 199/2013), que pasamos a comentar, pues todos ellos planteaban la misma pretensión: la nulidad del Decreto que aprobaba el Plan Integral de Residuos autonómico.

En este caso, el Ayuntamiento de l'Alcora es la parte demandante e interpone recurso contra el Decreto 81/2013, de 21 de junio, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, como hemos señalado.

Las peticiones de estimación de la demanda se basan en los siguientes puntos:

- Incumplimiento de la obligación de consultar a las entidades locales.
- Ausencia de EAE correcta del PIR.
- Incumplimiento de la exigencia de objetivos coherentes y conformes a la legislación aplicable.
- Carencia de criterios suficientes u objetivos sobre las ubicaciones de infraestructuras de valoración energética y eliminación de residuos y sobre su capacidad, como determina la legislación.
- Afectación negativa del PIR a espacios de la red Natura 2000.

Tras la valoración de las alegaciones de ambas partes, el Tribunal se remite a pronunciamientos anteriores y, adelantamos, solo estima parcialmente el recurso. Así pues, anula el apartado 3 del artículo 17 del Decreto relativo a la ubicación de las instalaciones, pues en el citado precepto no se contienen —como se exige desde la Directiva 2008/98/CE, sobre residuos— ni criterios ni lugares de ubicación que permitan identificar el emplazamiento de las futuras instalaciones, puesto que en el

texto que finalmente se anuló solo se hacía referencia a un plano cartográfico orientativo, referencia que el Tribunal considera insuficiente para dar cumplimiento a lo legalmente dispuesto ya que, en efecto, si bien el PIR no puede establecer la determinación concreta de cada una de las instalaciones, sí que debe fijar de una manera clara y determinante los criterios a considerar para la localización de las infraestructuras de gestión de residuos.

Sumari: 1. Autorització ambiental integrada: STSJCV 954/2015, de 9 de novembre 2. Pla Integral de Residus: STSJCV 1160/2015, de 30 de desembre.

Seguidament s'exposen les sentències més rellevants dictades pel Tribunal Superior de Justícia per ordre cronològic, i s'identifiquen per la temàtica que tracten. En el període objecte d'anàlisi no apareixen publicades en les bases de dades sentències del TSJ de la Comunitat Valenciana en relació amb el medi ambient, no obstant això s'ha tingut notícia de dos pronunciaments de gran importància.

1. Autorització ambiental integrada: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 954/2015, de 9 de novembre

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 954/2015, de 9 de novembre (Recurs 65/2012), adopta una decisió determinant per al municipi afectat quant a la protecció del medi natural.

En efecte, en aquest cas les parts demandants són l'Ajuntament de l'Alcora i la plataforma ciutadana "No a la contaminació", que impugnen la Resolució de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de l'any 2012 en la qual es desestimava el recurs d'alçada interposat contra la Resolució de 15.06.2011 en què es va concedir a l'empresa REYVAL AMBIENT, SL l'autorització ambiental integrada (AAI) per a la instal·lació d'emmagatzematge i tractament de residus peril·losos i no peril·losos, perquè les parts demandants al·leguen que aquesta AAI és contrària a dret, i se'n demana la nul·litat.

Les al·legacions de les parts demandants, com assenyala el TSJCV, poden sistematitzar-se en dos:

1. En primer lloc cal destacar la falta de realització de tràmits fonamentals com és en matèria ambiental: el tràmit d'informació pública, mentre que s'han produït modificacions substancials del projecte presentat, com també s'al·lega en el recurs, i l'absència d'informes preceptius i vinculants.

Sobre la falta d'informació pública, el TSJCV diu que en el cas que s'hi produeixin modificacions —sense exigir que aquests canvis siguin substancials— cal practicar un nou tràmit d'informació pública, i més encara si són substancials, com ho són en aquest cas i així ho entén el Tribunal.

El Tribunal extreu una conclusió i és que un mateix projecte no pot tenir concedides dos AAI, de manera que la més recent en el temps ha de substituir, si escau, la que ja s'ha concedit.

Una altra de les al·legacions procedimentals és la falta dels perceptius informes positius per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de l'Ajuntament d'on se situa la instal·lació, i que s'aprecia en aquest cas, en què es consideren vicis que suposen la nul·litat de la decisió adoptada per la Conselleria.

2. Les que fan referència a les modificacions substancials de l'activitat que havia obtingut l'AAI, modificacions que s'havien anat produint des de l'any 2007, i s'havien reiterat el 2008, 2009 i 2011.

Efectivament, la determinació de si la modificació és substancial depèn, com es desprèn de la legislació aplicable —la Llei 16/2001 i la Llei 2/2006—, de la consideració de l'òrgan competent per atorgar l'autorització, encara que s'especifiquen paràmetres concrets que cal tenir en compte per saber si la modificació és o no substancial, entre les quals hi ha la salut de les persones o el medi ambient, el grau de contaminació que es produeix. En aquesta línia ja l'any 2008 es va considerar que les modificacions dutes a terme en el projecte eren substancials en relació amb la instal·lació ja existent, de la mateixa forma que el 2008 i el 2009. El Tribunal posa en relleu com en l'enteniment de si la modificació és substancial cal tenir en compte aspectes quantitius: com és la grandària i capacitat de producció, però també aspectes qualitatius, com ara quins recursos naturals s'utilitzen, el tipus de residus produïts i gestionats, tots factors que s'aprecien en les proves presentades per la part actora i que estima el Tribunal, a més d'entendre que les modificacions no van portar parell el necessari tràmit d'informació pública, ni d'EIA.

Per tot el que hem dit anteriorment, el TSJCV declara la nul·litat de la Resolució de 12.4.2012 i, per tant, declara l'AAI concedida a l'empresa REYVAL AMBIENT, SL no conforme a dret. Enfront d'aquest recurs, cal interposar recurs de cassació, i així ho ha fet l'empresa demandada; per tant, la resolució final queda pendent.

Per concloure amb aquest comentari, cal exposar una qüestió que es planteja i que afecta la protecció del medi ambient. És veritat que la declaració de nul·litat satisfà les parts demandants, perquè s'aconsegueix deixar sense efecte l'AAI, no obstant això en plantejar-se recurs de cassació, la instal·lació continua duent a terme la seva activitat, i

causa el consegüent perjudici al municipi i veïns afectats. De manera que veiem que en l'execució de la sentència és on cal actuar ràpidament per pal·liar i evitar la contaminació ambiental.

2. Pla Integral de Residus: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 1160/2015, de 30 de desembre

Altres pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia en aquest període són els del 15 de desembre, 17 de desembre de 2015 i, finalment, el de 30 de desembre de 2015, en la Sentència 1160/2015 (recurs 199/2013), que comentem, ja que tots plantejaven la mateixa pretensió: la nul·litat del decret que aprovava el Pla Integral de Residus autonòmic.

En aquest cas, l'Ajuntament de l'Alcora és la part demandant que interposa recurs contra el Decret 81/2013, de 21 de juny, d'aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, com hem assenyalat.

Les peticions d'estimació de la demanda es basen en els següents punts:

- Incompliment de l'obligació de consultar a les entitats locals.
- Absència d'EAE correcta del PIR.
- Incompliment de l'exigència d'objectius coherents i conformes a la legislació aplicable.
- Manca de criteris suficients o objectius sobre la ubicacions d'infraestructures de valoració energètica i eliminació de residus i de la seva capacitat, com determina la legislació.
- Afecció negativa pel PIR d'espais de la xarxa Natura 2000.

Després de la valoració de les alegacions d'ambdues parts, el Tribunal es remet a pronunciaments anteriors i, avancem, solament estima parcialment el recurs, i anul·la l'apartat 3 de l'article 17 del decret relatiu a la ubicació de les instal·lacions, perquè el precepte esmentat no conté —com exigeix la Directiva 2008/98/CE sobre residus— ni criteris, ni llocs d'ubicació que permetin identificar l'emplaçament de les futures instal·lacions, ja que en el text que finalment es va anul·lar, solament es feia referència a un plànol cartogràfic orientatiu, referència que el Tribunal considera insuficient per

acomplir el que s'estableix legalment, ja que, en efecte, el PIR no pot definir la determinació concreta de cadascuna de les instal·lacions, però sí que ha de fixar d'una manera clara i determinant els criteris que cal considerar per localitzar les infraestructures de gestió de residus.